

José María Salcedo

UN CIEGO BUSCA A ARGUEDAS

En agosto de 1984, los restos de Jesús Oropeza Chonta eran enterrados en el cementerio de Utec, poblado de Lucanas, al sur del departamento de Ayacucho. Pocas veces más propia la palabra «restos» para describir el cuerpo torturado y calcinado del líder de la Confederación Nacional Agraria, asesinado por una patrulla policial a fines de julio de ese mismo año.

En mi condición de periodista tuve que cubrir aquel suceso. Con el reportero gráfico Carlos Domínguez pudimos introducirnos en la morgue del hospital de Puquio. Las fotografías de Domínguez —publicadas profusamente dentro y fuera del país— desbarataron la coartada del entonces ministro del Interior sobre una pretendida fuga de Oropeza luego de su reclusión en la cárcel local.

Posteriormente, la justicia común, con sede en Ica, sentenció a los culpables de aquel asesinato. Fue uno de los pocos casos en que los tribunales civiles ordinarios juzgaron y condenaron a miembros de las fuerzas del orden.

Pero todo esto es historia conocida. No lo es la breve anécdota que ahora me permito narrar.

Sálfamos del cementerio de Utec en plena noche, retomando el pequeño sendero por el que el cortejo de unas mil personas había acompañado al cadáver. Los que habíamos asistido al entierro formábamos una larga hilera en medio de la oscuridad. Recuerdo que yo ocupaba uno de los últimos lugares. No se oía sino murmullos y algún ruido de pasos dificultosos. A la salida del camposanto se había repartido trago y varios de los asistentes estaban bebiendo desde la noche anterior.

De pronto, escuché una voz en los primeros puestos de la fila. Una voz que gritaba «¡José María!» Lo repitió tres o cuatro veces. Pensando que me llamaban, me acerqué. Vi al hombre que gritaba. Era un anciano. Su mano derecha se apoyaba en un rudimentario bastón. Con la otra apretaba el hombro de un chiquillo. De un golpe, me di cuenta de que el hombre era ciego. Un anciano

ciego, en medio de la oscuridad, que gritaba mi nombre

Y, sin embargo, no era mi nombre el que gritaba. Cuando le pregunté si me estaba llamando, el hombre se sorprendió: «No, no, yo estoy llamando a José María»

Se refería a José María Arguedas, no a mí. Me lo fue explicando sin perder el paso y, luego, mientras le invitaba algo de beber en una rudimentaria bodeguita. Quizá en mi apresurado regreso a Lima —via Nasca— perdí el casete que guardaba esa conversación de media noche.

Esto ocurrió hace más de ocho años, pero recuerdo aquella sensación de reconstrucción de toda una época, en aquel mismo paisaje, pero de una época tan distinta, aparentemente.

Aquel ciego era una compañero infantil de José María Arguedas. Aquellos parajes de Utec y San Juan de Lucanas, los sitios donde corretearían, luego tan bien reflejados en la obra literaria de Arguedas. El ciego llamaba a Arguedas —o más bien, al espíritu de Arguedas— para que presenciara lo que acababa de ocurrir: el crimen de un comunero.

Aquel escándalo incomprensible se había producido porque otros comuneros habían incitado a la policía, según todo lo indicaba. Pero, aunque así no fuera, otros comuneros sí habían celebrado aquella espantosa muerte.

Apenas llegado a Utec, siguiendo el féretro de Oropeza que sería velado en la sede de un local municipal, reparé en una insólita celebración. A unos treinta metros de donde se encontraba el cadáver

había tragos y algarabías, una gran pachamanca. Todo era auspiciado y financiado por los hermanos Pusa, los jefes del clan de Utec contra los que Oropeza se había enfrentado ante los tribunales, por un conflicto de tierras.

Más tarde entrevisté al párroco local. El padre Pusa —otro de los hermanos— había acusado a Oropeza de actividades terroristas. Los escritos de este sacerdote —cuya copia yo había conseguido— constituían gravísimas denuncias, que habían servido para que la policía local apresara a Oropeza y, más tarde, lo torturara y asesinara.

Por cierto, una entrevista con el jefe del puesto policial de Puquio me había permitido entrever que se trataba de un joven desequilibrado que se enfrentaba a una responsabilidad que le quedaba demasiado grande.

Pero su amparo, su coartada, era la denuncia de aquel párroco de Utec. El padre Pusa no sólo reconoció la autenticidad de los escritos que yo le presentaba. No tenía ninguna duda de que Oropeza estaba bien muerto. Cuando le pregunté qué actos terroristas había cometido el dirigente, eso no le importó. Lo que valía para él, eran las «malas intenciones» de Oropeza.

Se negó a celebrar una misa de difuntos y, contra toda costumbre, se negó también a que la campana de su iglesia tocara a entierro mientras desfilaba el cortejo, rumbo al cementerio. De todas maneras, la campana tocó, pero gracias a que un comunero trepó hábilmente al campanario, guardando un equilibrio prodigioso mientras

caminaba por las rotas tejas de la iglesia del pueblo

Aparentemente, Oropeza era un típico dirigente campesino, pleitista y legalista. Sólo aparentemente. La familia Pusa le había entablado más de quince juicios. Había pleitos de tierras y disputas por la elección de Oropeza como líder de la comunidad. Luego vinieron las denuncias sobre terrorismo, cuando el terrorismo se puso de moda.

El legalismo de Oropeza tenía razón de ser: se jugaba la vida. Regresó a Utec a pesar de las denuncias y las amenazas de muerte. Confió en las promesas de un ministro —que le otorgó una especie de certificado de buena conducta—, en su propia suerte, en la protección de sus amigos y su comunidad, o quién sabe si asumiría la inminencia de su asesinato como una fatalidad que tarde o temprano tendría que cumplirse.

Que Oropeza fuese guiado por el imán de la fatalidad, como el personaje de alguna tragedia clásica, es algo que no debe descartarse, luego de años de cansancio ante los tribunales o por comprobar que la historia de sus padecimientos y asedios —a fuerza de repeticiones— ya no conmovía a sus interlocutores en Lima.

El ciego que llamaba a José María Arguedas aquella noche del entierro de Oropeza en Utec, sonaba trágico y desesperado. Su amigo José María tendría que ver cómo habían cambiado las cosas, tanto como él lo veía, a pesar de su ceguera física.

Esta anécdota regresa a mi

memoria luego de leer el artículo de Remy publicado en la revista *Quehacer*. En este artículo y en otro anterior de la misma autora —publicado en la revista *Debate Agrario*—, ella se refiere a un personaje de Arguedas, el comunero Victo Pusa. Es el cuento «Los comuneros de Utej Pampa». El Victo Pusa que allí aparece es un líder que defiende los derechos de su comunidad. Cincuenta años después, sus descendientes aparecen implicados en el crimen de otro líder, esta vez Oropeza. Siguiendo a Arguedas, el verdadero heredero de aquel Pusa de los años treinta sería Jesús Oropeza.

Una amplia y excelente discusión sobre el «nuevo rostro» de las comunidades campesinas en el Perú se reproduce en el libro *Estrategias para el desarrollo de la sierra**, publicado en abril de 1986, y en los números 13 y 14 de *Debate Agrario*, de 1992.

Ignoro si debe inculparse a Arguedas por legarnos una visión idílica del mundo de las comunidades campesinas en el Perú. En todo caso, esta posible utopía comunera también podría encontrarse en Mariátegui, Valcárcel o Castro Pozo, por citar a autores «científicos» antes que «literarios», si es que los límites entre la ciencia y la literatura existen realmente.

Si debo recordar que mi propia visión de las comunidades campesinas de Ayacucho varió sus-

* Varios autores. Cusco: Universidad Nacional Agraria y Centro de Estudios Rurales Bartolome de Las Casas, 1986.

tancialmente cuando, en febrero de 1983, recorrí —en compañía del también asesinado periodista Luis Morales Ortega— la misma ruta de los periodistas muertos un mes antes en Uchuraccay. Produje entonces un titular de prensa que muchos criticaron «Guerra civil entre comunidades». Me refería a que el fenómeno senderista había reavivado viejos conflictos entre comunidades campesinas, enfrentadas entre sí desde hace tantísimos años o siglos, si queremos reconocer que las raíces de las actuales comunidades campesinas se remontan a épocas preincasicas o, más cerca, a los esfuerzos del virrey Toledo por organizar a esta parte del imperio español.

Con el caso Oropeza, la figura se me complicó. Esta vez, el terrorismo servía para catalizar conflictos dentro de las comunidades, lo que, desde una perspectiva más «occidental», podríamos llamar una guerra de clanes.

La imagen, en fin, de una perpetua guerra civil, suspendida a veces, pero siempre subterráneamente activa hasta que algún «pretexto» como el terrorismo, la

policía o cualquier otro elemento extraño sirviera para incentivar el conflicto.

Con lo que la violencia «política» no resultaría sino un telón de fondo, una suerte de escenografía variable según las circunstancias pero, al fin y al cabo, secundaria frente a los verdaderos conflictos seculares.

Y de la utopía de la eterna paz y la solidaridad, podría pasarse a otra utopía, la del eterno conflicto. Descubro ahora que una y otra no harían sino alimentar las imágenes acartonadas de un «indio» o una «comunidad» que no acabaríamos de comprender, por negarnos a aceptar que los «andinos» son, finalmente, tan humanos como los demás, menos específicos de lo que nos ha estado pareciendo.

Pero esta nota no quiere —ni puede— aportar nada sustantivo a este debate de antropólogos y otros expertos que sí saben lo que dicen. Sólo quería introducir en este escenario la imagen de un anciano ciego —cuyo casete lamentablemente perdí— que reclamaba el testimonio de Arguedas para entender qué es lo que estaba pasando en Uteç y, por qué no, en todo este país.